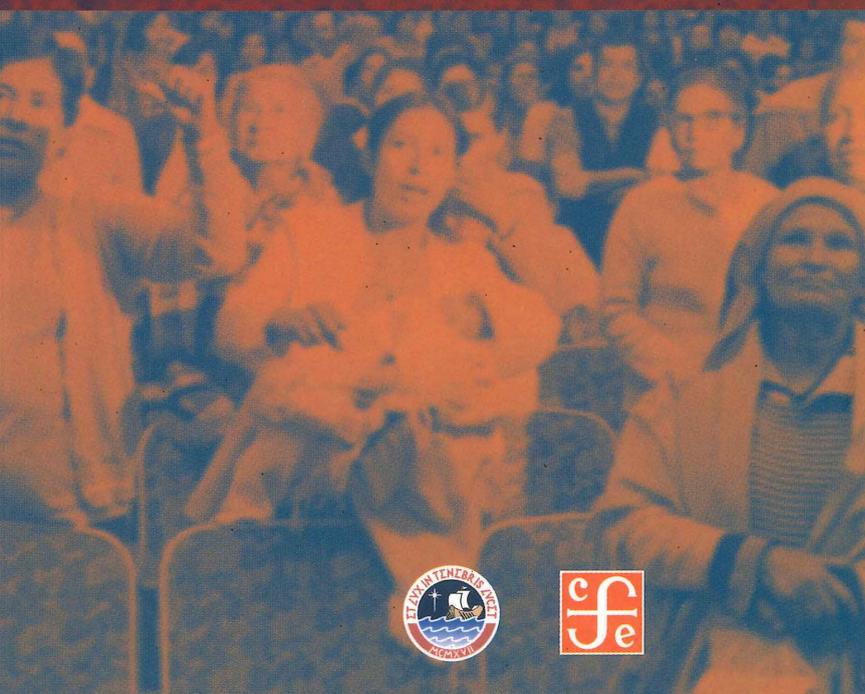


SOCIEDAD CIVIL, ESFERA PÚBLICA Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: ANDES Y CONO SUR

Aldo Panfichi
(coordinador)

Capítulo 16



Primera edición, 2002

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra
—incluido el diseño tipográfico y de portada—,
sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico,
sin el consentimiento por escrito del editor.

Comentarios y sugerencias: editor@fce.com.mx
Conozca nuestro catálogo: www.fce.com.mx

D. R. © 2002, FONDO EDITORIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Plaza Francia 1164, Lima 1, Perú

D. R. © 2002, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.

ISBN 968-16-6762-X

Impreso en México

LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR GUBERNAMENTAL

HANNY CUEVA BETETA
Y ARMANDO MILLÁN FALCONI

LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS PARA LA ALIMENTACIÓN (OFA)¹

Desde comienzos de la década de 1990, la sociedad peruana ha observado el surgimiento y crecimiento de organizaciones formadas, lideradas e integradas por mujeres, cuyo objetivo básico, en un contexto de crisis socioeconómica, es el de cubrir la necesidad esencial de alimentación de sus familias. Sus labores, sin embargo, trascienden el tradicional ámbito doméstico y constituyen una expresión de las transformaciones actuales de la dinámica social peruana.

Las OFA suelen ser definidas a partir de ciertas características compartidas: “tienen en común la acción colectiva destinada a la compra, preparación y distribución diaria de alimentos con miras a reducir los costos de la alimentación familiar. Además, permiten disminuir el tiempo empleado por las mujeres para las tareas domésticas y operan como instancias de socialización, capacitación y, eventualmente, generación de ingresos” (Blondet y Montero, 1994: 27). En esta definición habría que enfatizar la diversidad de actividades en las que se ven involucrados los CM en los últimos años —p. e., la organización y manejo de actividades productivas destinadas a mejorar los ingresos familiares—, así como la condición de género de sus integrantes, para tener una visión más completa de las organizaciones que se analizan.

La experiencia de organización colectiva o comunitaria con fines de apoyo mutuo —como es el caso de las OFA— es una práctica generalizada entre los pobladores de los sectores populares y de mayores carencias —sociales, económicas, políticas—. Este tipo de prácticas no se rela-

¹ Si bien no existe un consenso sobre el término para denominar a estas organizaciones, optamos por el de *organizaciones femeninas para la alimentación* (OFA), pues nos permite establecer una “continuidad” con investigaciones previas (Delpino, 1991; Tocón, 1997; Blondet y Montero, 1994), así como describir los aspectos comunes de estas organizaciones.

ciona necesariamente con particularidades históricas o sociales, sino que tiene su fundamento en la condición general de cualquier grupo humano que busca satisfacer sus necesidades básicas: agruparse para sobrevivir. Así, en la literatura académica, estas entidades son llamadas “organizaciones sociales de base”, y son consideradas como un medio para resolver problemas de distinto orden, ante los cuales la acción del Estado se ha manifestado insuficiente o inadecuada.²

Sobre comedores, comités y clubes de madres

Una definición breve de cada una de las OFA permitirá comprender mejor sus particularidades. Los comedores populares (CP), también llamados “comedores comunales” o “comedores autogestionarios”, son organizaciones de madres —de 20 a 30 socias— dedicadas a la preparación colectiva de menús, los cuales son vendidos a los pobladores de su comunidad, y clientes en general, a precios económicos. El abaratamiento de las raciones es el resultado de la donación de una parte de los insumos, la compra de víveres al por mayor, y el trabajo gratuito de las mujeres (Tovar, 1996: 115).

Este tipo de práctica comunitaria —originada a inicios de la década de 1980— permite a las mujeres —y a aquellas que sólo hacen uso del servicio— un valioso ahorro de tiempo en las tareas de cocina, proporcionándoles la oportunidad de realizar otro tipo de actividades laborales, educativas y familiares. La organización del comedor les proporciona además a las mujeres que lo integran una experiencia que sobrepasa las simples labores domésticas en las que han estado encasilladas socialmente. Según Tovar, las socias experimentan nuevas formas de comunicación y afectos, “se capacitan y ejercitan en actividades organizativas, administración de recursos materiales y económicos, además de ciertas habilidades manuales” (1996: 115-116).

Los comités del vaso de leche (CVL), por su lado, son también organizaciones integradas por madres, que surgieron en la década de 1980 debido al estímulo del municipio de Lima metropolitana y que luego se extendieron por todo el país, y tienen la tarea de distribuir diariamente raciones de leche a la población infantil —menor de seis años— y, en ocasiones, a madres gestantes o lactantes. En este caso, todo el alimento distribuido es donado por organismos internacionales, gubernamentales o particula-

² Por ejemplo, organizaciones vecinales, rondas campesinas y otras organizaciones de combate a la delincuencia, asociaciones de vivienda, comités de salud, entre otras (Pásara, Delpino *et al.*, 1991: 2).

res. La condición es entregar la leche preparada y no en polvo, que es la manera como las socias reciben el producto. Esta condición es la que asegura la continuidad del trabajo colectivo.

Sin embargo, las posibilidades organizativas y políticas de los CVL están restringidas por la intervención permanente de los gobiernos locales, pues son ellos los que favorecen la existencia del Programa del Vaso de Leche. Esta permanente influencia de la voluntad política de sus impulsores pone en cuestión las posibilidades de participación autónoma que tienen las integrantes de estas organizaciones, así como su potencial papel como motores de cambio y reivindicaciones sociales (Córdova y Gorriti, 1989: 9).

Finalmente, los clubes de madres (CM) son organizaciones femeninas³ de más larga y polémica historia. Los primeros fueron fundados, en la década de 1960, para los sectores empobrecidos de la población, con el fin de canalizar las actividades caritativas y asistencialistas de instituciones religiosas, de mujeres de altas esferas sociales, así como de políticos interesados en ampliar sus bases sociales de apoyo. Estas organizaciones fueron caracterizadas entonces como espacios de sumisión y claro sentido manipulador (Delpino, 1991: 32).

Sin embargo, el cuestionamiento del asistencialismo como estrategia de relación de los sectores más pobres de Perú, y la instauración de nuevas políticas gubernamentales basadas en la autogestión para elevar los ingresos de las familias más necesitadas, han reconfigurado las características de los CM. En la actualidad, estas organizaciones se han convertido en espacios que permiten a las mujeres salir de sus hogares para conseguir satisfacciones personales. Tocón constata, para el caso de Chimbote, que las madres se reúnen de dos a tres horas, dos veces por semana, a pesar de no recibir la ayuda alimentaria durante largos periodos, con el fin de cumplir actividades comunales y educativas —charlas o talleres—, o realizar labores de bordado, tejido y artesanía (1997: 46-47). Incluso la formación de microempresas ha sido promovida a través de diferentes proyectos financiados por el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), organismo gubernamental perteneciente al Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano (Beltrán *et al.*, 1997).

Las actividades de las integrantes de los CM se extienden también hacia su propia comunidad. En efecto, los medios de comunicación dan

³ Eventualmente, los CM de provincias integran como “socios”, paradójicamente, a los esposos, los que a su vez tienen una participación activa en los aspectos productivos de las microempresas (Beltrán *et al.*, 1997: 33).

cuenta con cierta regularidad de la realización de tareas que escapan al espacio interno del club. En 1997, por ejemplo, alrededor de 200 madres del Cono Norte se encargaron de la limpieza de 19 colegios estatales de Los Olivos antes del inicio del año escolar. La iniciativa surgió de la Asociación de Clubes de Madres del Cono Norte, y las mismas mujeres realizaron las gestiones con el municipio correspondiente. En el país es posible constatar el mismo fenómeno de proyección de los clubes hacia su entorno inmediato; entre otras labores, los CM han participado activamente en tareas de reforestación en Tarma, así como en la limpieza de la lenteja de agua de la bahía interior del Titicaca.⁴

Aproximación cuantitativa a las OFA

La mayor parte de las investigaciones en torno a las OFA surge del supuesto —sin duda correcto— de que estas organizaciones agrupan y benefician a un elevado número de personas. Con esta base, la mayoría de los trabajos realizan un análisis cualitativo en torno a la importancia e impacto de estas organizaciones. Sin embargo, en la literatura sobre el tema se extraña un marco cuantitativo general que ilustre estadísticamente algunas características de las OFA.

Características de los beneficiados por las OFA

Una de las principales características de las OFA es que son las ejecutoras finales de la asistencia alimentaria brindada por el gobierno; sin su participación, los costos operativos de dicha asistencia se elevarían considerablemente. Por ello, pueden analizarse cuantitativamente estas organizaciones a partir de la información estadística recogida en la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) en torno a los principales programas alimentarios que las OFA ejecutan. Según esta fuente, aproximadamente 49.5% de los hogares peruanos (unas 2 378 000 familias) tuvieron acceso a programas de asistencia alimentaria en 1995 (cuadro 1). Asimismo, de acuerdo con esta misma encuesta, los beneficiarios consideran que los programas alimentarios más importantes son: desayuno escolar, CVL, CM y CP.

⁴ Véanse los artículos publicados en *El Comercio*: “Madres ayudaron a limpiar 19 colegios en Los Olivos” (23 de marzo de 1997), “En noviembre se instalará en Tarma un millón de plántones” (15 de agosto de 1997), y “Levantamos la alfombra verde del lago Titicaca” (20 de octubre de 1998).

CUADRO 1. *Hogares según uso de los programas alimentarios, 1995*
(porcentajes)

	<i>Porcentaje uso</i>	<i>Número de hogares</i>
Desayuno escolar	45.4	1 079 612
Vaso de Leche	35.7	848 946
Club de Madres	20.2	480 356
Comedor Popular	8.3	197 374
Donación directa alimentos	4.5	107 010
Alimentos por trabajo	3.4	80 852
Panfar	3.4	80 852
Comedor parroquial	1.4	33 292

FUENTE: INEI, 1996.

A diferencia del programa de los desayunos escolares, que se ejecuta entregando los alimentos directamente en los colegios —lo que explica la enorme cobertura—, los programas del CVL, CM y CP se llevan a cabo proporcionando los alimentos a las respectivas organizaciones femeninas, las que se encargan de ejecutar la entrega. Considerando que los ejecutores de tres de los cuatro principales programas alimentarios en Perú son OFA, queda claro su protagonismo en la satisfacción de las carencias de los sectores más necesitados.

Respecto de la distribución geográfica, existen diferencias entre los beneficiarios de los programas alimentarios ejecutados a través de los CVL en comparación con los ejecutados a través de los CP (cuadro 2). En el primer caso, la mayoría de los beneficiarios se encuentra en la sierra rural (40.7%), mientras que en el segundo se concentran en Lima metropolitana (46%).

Estas diferencias son interesantes porque apuntan a concentrar el foco de análisis de los CP en Lima metropolitana y, al mismo tiempo, ilustran la necesidad de profundizar los estudios en torno a los CVL en la sierra rural.

Por otro lado, es interesante apreciar que el número de hogares beneficiados por los CP es considerablemente inferior al de los CVL y CM. A pesar de lo anterior, la mayoría de los estudios en torno a las OFA se centran en los CP. Esto podría entenderse comparando las frecuencias de uso que los beneficiarios hacen de estas organizaciones.

Como se aprecia en el cuadro 3, la frecuencia de uso de los CP es largamente superior a la de los CVL y CM: mientras 83.2% de los hogares beneficiados por los CP tienen acceso diaria o interdiariamente, este porcentaje sólo alcanza 38.1% en el caso de los CVL, y apenas 16% en el caso

CUADRO 2. *Hogares beneficiados según programas alimentarios y área geográfica, 1995*
(porcentajes)

	<i>Hogares beneficiados</i>	<i>Costa urbana</i>	<i>Costa rural</i>	<i>Sierra urbana</i>	<i>Sierra rural</i>	<i>Selva urbana</i>	<i>Selva rural</i>	<i>Lima metropolitana</i>
Vaso de Leche	848 946	9.3	6.7	10.4	40.7	3.0	13.6	16.3
Club de Madres	480 356	—	—	—	—	—	—	—
Comedor Popular	197 374	17.7	8.9	6.3	15.6	4.2	1.2	46.0

FUENTE: INEI, 1996.

CUADRO 3. *Hogares beneficiados según programas alimentarios y frecuencia de uso, 1995*
(porcentajes)

	<i>Hogares beneficiados</i>	<i>Diario</i>	<i>Interdiario</i>	<i>Semanal</i>	<i>Quincenal</i>	<i>Mensual</i>
Vaso de Leche	848 946	34.5	3.6	6.3	3.7	51.9
Club de Madres	480 356	10.1	5.9	9.5	4.5	70.0
Comedor Popular	197 374	62.9	20.3	8.0	4.3	4.5

FUENTE: INEI, 1996.

de los CM. En estos dos últimos, la frecuencia de uso de la mayoría de los hogares beneficiados es mensual. Esto permite inferir que los CP se relacionan de manera más permanente con los hogares beneficiados; no obstante, esta afirmación no implica necesariamente que estos espacios correspondan a una mayor integración social.

Esta continuidad de acceso a los CP sí permitiría explicar por qué buena parte de la asistencia alimentaria oficial en el país se ejecuta a través de estas organizaciones, no obstante que involucran un número de beneficiarios mucho menor que los CVL y CM. En efecto, si se consideran las percepciones de los beneficiarios sobre las instituciones que aportan los alimentos a las OFA, se advierte que las principales fuentes de alimentos para estas tres organizaciones son públicas: municipalidades y Pronaa (cuadro 4).

CUADRO 4. *Percepción del organismo ejecutor de los programas alimentarios, 1995 (porcentajes)*

<i>Organismo ejecutor</i>	<i>CVL</i>	<i>CP</i>	<i>CM</i>
Total	100.0	100.0	100.0
Municipalidad	71.6	9.6	25.7
Pronaa	5.5	45.2	31.4
Cáritas (ONG)	0.9	6.9	8.6
Otro	5.5	7.6	6.7
No sabe	17.4	30.7	27.6

FUENTE: INEI, 1996.

Respecto de los ingresos de los hogares beneficiados, debe indicarse que los atendidos por los CP tienen en promedio un ingreso familiar y per cápita ligeramente mayor al de las familias beneficiadas por los CVL y CM. Esto es evidente al observar los dos primeros intervalos de ingresos considerados en el cuadro 5: mientras los ingresos per cápita de más de 50% de los hogares beneficiados por los CVL y CM se encuentran por debajo de 100 nuevos soles de 1995 (alrededor de 45 dólares), sólo 34.3% de los beneficiados por los CP se encuentra por debajo de dicha cifra. De manera similar, mientras que más de 40% de los beneficiados por los CVL y CM se encuentran por debajo de 400 nuevos soles de 1995 (alrededor de 180 dólares), menos de 30% de los hogares beneficiados por los CP tienen ingresos familiares por debajo de esa cifra.

Haciendo algunos supuestos, se estiman los promedios de ingreso per cápita y familiar de los hogares según el programa alimentario del que se benefician. Esta estimación confirmaría que los ingresos de los beneficiados por los CP son superiores a los correspondientes a los otros dos programas.

Finalmente, entre los hogares que no tienen acceso a los beneficios de las OFA, sólo 30% de las respuestas afirman que no necesitan dicho beneficio; es decir, alrededor de 70% de los hogares que no tienen acceso a estos programas consideran que sí los necesitan. Asimismo, entre 20 y 50% de los hogares no tienen entrada porque no existen tales programas en sus zonas (cuadro 6).

Sin embargo, es interesante notar que hay un grupo de hogares que podrían tener acceso y que considera necesitar los beneficios, pero que decide no hacerlo. Las principales razones para ello parecen ser la falta de tiempo, en los casos de los CVL y los CP (lo cual hace percibir cierta

CUADRO 5. Hogares beneficiados por nivel de ingreso del hogar y per cápita, 1995
(porcentajes y en nuevos soles de 1995)

<i>Ingreso per cápita</i>	<100	100-149	150-199	200-249	250-299	>300	<i>Promedio estimado (en nuevos soles)</i>
Vaso de Leche	53.9	20.5	10.3	6.1	3.8	5.4	140-160
Club de Madres	55.6	17.6	10.4	4.9	2.5	9.0	140-160
Comedor Popular	34.3	24.5	15.1	9.9	5.7	10.5	160-180
<i>Ingreso del hogar</i>	<399	400-599	600-899	900-1299	>1300	<i>Promedio estimado (en nuevos soles)</i>	
Vaso de Leche	40.0	21.5	18.6	10.6	9.3	590-650	
Club de Madres	44.9	25.0	13.4	10.2	6.5	540-600	
Comedor Popular	28.4	23.5	20.5	16.3	11.3	670-720	

FUENTE: INEI, 1996.

CUADRO 6. *Hogares que no participan en programas alimentarios según razones, 1995*
(porcentajes)

		<i>Falta de tiempo</i>	<i>Mala organización</i>	<i>Muy distante</i>	<i>No necesita</i>	<i>No existe</i>	<i>Otra razón</i>
Vaso de Leche	100.0	11.6	12.7	2.0	31.1	21.2	21.4
Club de Madres	100.0	4.3	3.3	0.7	31.5	51.7	8.5
Comedor Popular	100.0	12.7	8.7	4.0	29.5	31.7	13.4

FUENTE: INEI, 1996.

obligatoriedad de proporcionar horas de trabajo para recibir los beneficios de los programas), y la mala organización.

Estimaciones de las OFA

La información estadística sobre las OFA es pobre y dispersa; no existen estadísticas oficiales, registros, ni censos publicados que recojan información específica y de manera rigurosa acerca del número de CP, CM y CVL en todo el país. Igualmente, no hay información precisa acerca del número de socias en cada organización, las horas de trabajo voluntario invertidas o los aportes en dinero de las socias para cubrir los alimentos. En esta sección pretende presentarse un panorama general y una estimación más precisa de cada una de las organizaciones en estudio a partir de la información estadística disponible.

Como punto de partida, es importante resaltar que en 1994 se realizó un Censo de Municipalidades Distritales que recogió información acerca de dichas organizaciones y sus beneficiarios, información que fue proporcionada por las municipalidades mismas.⁵

Esta información indica que la mayoría de los hogares beneficiados por los CM se encuentran fuera de Lima metropolitana (lo cual indicaría la necesidad de profundizar los estudios en torno a esta organización fuera de este ámbito). Por otro lado, comparando la información contenida en el cuadro 7 con la del cuadro 1, puede concluirse que el número total de hogares beneficiados por los CVL, según ambas fuentes, se encuen-

⁵ Esta información no fue incluida en la publicación oficial sobre el Censo de Municipalidades. Según personal del INEI, esto fue así porque lo obtenido no tenía la solidez esperada, dado que las cifras no fueron recogidas directamente. Como se ve, parecería que las cifras reportadas se encuentran subestimadas.

CUADRO 7. Número de OFA y beneficiarios, 1994

	OFA		Beneficiarios		Núm. de hogares ¹
	Número	Porcen- taje	Número	Porcen- taje	
Comités del Vaso de Leche	30 783	100	2 738 037	100	912 679
Lima metropolitana	7 618	25	773 715	28	257 905
Resto del Perú	23 165	75	1 964 322	72	654 774
Club de Madres	19 250	100	1 135 264	100	227 053
Lima metropolitana	3 121	16	167 541	15	33 508
Resto del Perú	16 129	84	967 723	85	193 545
Comedores Populares	4 486	100	365 281	100	73 056
Lima metropolitana	2 250	50	248 892	68	49 778
Resto del Perú	2 236	50	116 389	32	23 278

¹ Se asume que se benefician tres niños por hogar de los CVL y cinco miembros por hogar de los CP y CM.

FUENTE: INEI, 1994.

tra en un rango aceptablemente similar (siendo la estimación del censo superior en 7.5%). Esto no resulta sorprendente si se considera que la información fue reportada directamente por las municipalidades —instituciones que manejan el programa del vaso de leche—, y debido a que, probablemente, en dichas instituciones se encuentran registrados algunos comités que ya han dejado ya de existir.

Asimismo, como es de esperar, las estimaciones del censo sobre los CP y CM son muy inferiores (63 y 53%, respectivamente), puesto que no es necesario que estas organizaciones se registren en las municipalidades para recibir la asistencia alimentaria. En este punto, cabe recordar que tiene más sentido afirmar que existe una subestimación en el censo antes que una sobreestimación de la ENH, dado que esta última es información oficial y cuenta con la suficiente solidez estadística.

Un segundo hecho que sugiere la subestimación en el Censo de Municipalidades se encuentra en las cifras relacionadas con el número de CP y CVL en Lima metropolitana. Mientras la estimación del censo apenas llega a más de 10 000, Blondet y Montero identificaban alrededor de 15 000 para el mismo año y área, sobre la base de información proporcionada por Cáritas, CARE y federaciones departamentales, provinciales y locales que agrupan a ambas organizaciones (1994: 28). Considerando que es poco probable que dicha subestimación esté relacionada con el número de CVL por las razones antes expuestas, se podría concluir que ella se encuentra en los CP.

CUADRO 8. *Las OFA en la economía peruana, 1995*

	CM	CVL	CP	Total
Núm. organizaciones	24 018	42 447	9 869	76 334
Núm. socias	480 356	848 946	197 374	1 526 676
% Población entre 15-65, 1995	3.42%	6.04%	1.40%	10.86%
Núm. personas beneficiadas	2 401 780	2 546 838	986 870	5 935 488
% Población, 1995	10.21%	10.82%	4.19%	25.22%
Núm. horas de trabajo voluntario	57 642 720	154 932 645	72 041 510	284 616 875
Núm. equivalente a personas trabajando tiempo completo ¹	31 328	84 203	39 153	154 683
% PEA no agrícola, 1995	0.59%	1.58%	0.73%	2.90%
% PEA servicios, 1995	0.80%	2.14%	0.99%	3.93%
Contribución monetaria a la economía (en dólares) ²	72 053 400	139 439 381	162 093 398	373 586 178
% PIB, 1995	0.12%	0.24%	0.28%	0.64%
Contribución en trabajo voluntario a la economía (en dólares)	16 139 962	43 381 141	20 171 623	79 692 725
% PIB, 1995	0.03%	0.07%	0.03%	0.14%
Contribución total a la economía % PIB, 1995	88 193 362 0.15%	182 820 521 0.31%	206 485 873 0.35%	477 499 756 0.81%

¹ Este indicador ofrece el número de personas que deberían trabajar tiempo completo durante un año para cubrir las horas de trabajo voluntario en cada organización. Por esta razón, es comparable con la PEA.

² Es importante señalar que la imputación monetaria por hora de trabajo voluntario utilizada —0.28 dólares— es bastante baja (se podría denominar un sueldo “piso”); sin embargo, dado que es la única estimación al respecto, y dada la dificultad para medir el costo de oportunidad de una hora de trabajo de las personas involucradas —que en la mayoría de los casos carece de trabajo—, se ha decidido utilizar esta cifra, destacando la subestimación (véase Beltrán, Cueva y Millán, 1997).

Tomando en cuenta la escasa información y las aparentes limitaciones del Censo de Municipalidades, se han realizado estimaciones específicas en torno a las OFA sobre la base de la información de la Encuesta Nacional de Hogares (1995), presentada en el cuadro 1, acompañadas de algunos supuestos, con el objetivo de ilustrar mejor su participación en la economía nacional.

Como se aprecia en el cuadro 8, los números de organizaciones estimados son superiores a los reportados por el Censo Municipal (cuadro 7). Teniendo en cuenta la aparente subestimación de dicho censo, esto no resulta preocupante. Más aún, considerando que según el Pronaa existen actualmente 10 248 CP, parecería que estas estimaciones son más

reales. Algo similar sucede si se analiza el número de beneficiarios de dichos CP, que según nuestras estimaciones es de 986 870 personas y, según el Pronaa, de unas 1 033 000 (lejos de la cifra estimada por el Censo Municipal en ambos casos).

Sobre la base de las estimaciones realizadas, se puede afirmar que las OFA no son sólo importantes en términos del número de sus beneficiarios (alrededor de 25% del total de la población peruana para 1995), o del número de personas que logran involucrar como miembros y trabajadores voluntarios (casi 11% de la población entre 15 y 65 años, considerada económicamente activa, es socia de alguna OFA y aporta a la misma trabajo voluntario),⁶ sino que existe un importante aporte económico de estas organizaciones, tanto a través del trabajo voluntario como mediante su contribución monetaria para completar las raciones servidas. En total, la contribución a la economía de estas OFA representa alrededor de 478 millones de dólares —equivalentes a 0.81% del PIB.

Carácter y aspectos sociales de las OFA

La definición de las OFA ha sido construida a partir de las características comunes que muestran estas organizaciones. Sin embargo, las diferencias entre ellas, no tanto en sus estructuras organizativas sino en su dinámica participativa y definición de metas y objetivos, han generado discrepancias entre los investigadores, y algunos establecen claras diferencias entre comedores y comités, afirmando que estos últimos no tendrían un verdadero carácter de organización social.

Esta afirmación se fundamenta en que el marco organizacional de los comités no permite reconocer una estructura que comprometa a todas sus integrantes, así como tampoco cambios sociales como resultado del efecto del programa municipal en las socias (Tovar, 1996: 138). Además, según Delpino (1991: 35), la organización de los CVL no constituye un fin en sí mismo, sino sólo un medio para tener acceso a los productos donados. La misma opinión es compartida por Grompone, quien establece una distinción entre una administración permanente de los CP y una "administración pasiva" de los CVL (citado en Tovar, 1996: 71). Los CP, en cambio, sí constituirían un fin en sí mismos, así como un medio para

⁶ Nótese que en estos dos casos es probable que el porcentaje sea un poco menor, puesto que puede haber duplicación de las personas beneficiadas. Sin embargo, dados los indicadores utilizados para medir su participación en la economía, la tasa de duplicidad no es importante (ya que medimos horas de trabajo voluntario y monto en soles de las contribuciones realizadas).

conseguir metas de naturaleza social: estrategias de solución colectiva para la sobrevivencia de la familia popular, cuestionamiento de los papeles familiares tradicionales, capacitación en la participación de la vida comunitaria, entre otras (Tovar, 1996: 53).

Pero los CP también tienen sus propias limitaciones, entre ellas: la imposición de las condiciones y exigencias de algunas instituciones benefactoras sobre las socias de los comedores; la dificultad para interiorizar valores como la solidaridad o identidad de género que requieren de un periodo de inversión en tiempo; o la condición gratuita —no remunerada— del trabajo de las socias. Es necesario añadir, para intentar relativizar algunas de las creencias comunes relacionadas con los CP, que las familias más pobres no necesariamente son atendidas por estas organizaciones (véase cuadro 5), puesto que no siempre disponen del mínimo necesario para la compra de los menús; y los “casos sociales” —indigentes y ancianos desamparados— que cubren los CP constituyen un número pequeño de personas. En consecuencia, como resalta Tovar (1996: 63), las familias que se benefician con los servicios de los CP no siempre se encuentran en el último estrato de pobreza.

La cuestión de la autonomía

Uno de los *handicaps* más importantes, señalan Barrig y Fort (1987: 106), es la extendida politización en todos los programas de ayuda, tanto desde el gobierno como desde las ONG. De hecho, la autonomía se convierte en una cualidad difícil de conseguir en la medida que prácticamente toda institución benefactora tiene condiciones que exigir. Estas exigencias pueden alterar el desempeño de la organización y tener un efecto considerable sobre las personas a las que brindan sus beneficios. Este impacto es lo que precisamente comprueba Sara Lafosse (citada en Tovar, 1996: 53) al evaluar los logros en alimentación y salud de dos tipos de comedores: los “independientes” o autogestionarios, y los “administrados” por instituciones privadas o estatales que incentivaron su formación. Los resultados del estudio dejaron en claro que los primeros cumplen satisfactoriamente con las metas autopropuestas, mientras que los segundos no cumplen a cabalidad con los objetivos inherentes a su función. Por lo tanto, la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos estaría directamente relacionada con la “independencia” de los comedores.

Para el caso de los CP, Lora señala que reconocer esta autonomía significa asumir un trato respetuoso en dos planos. El primero consis-

te en evitar la manipulación del comedor en función de otros intereses que no sean los de la propia organización. El segundo tiene que ver con evitar humillar a la organización o a sus miembros por la situación de pobreza en la que se encuentran, sobre todo cuando alguna institución, por haber donado algo, se siente con autoridad para desconocer la organización, planes de trabajo, estatutos, reglamentos, instancias de centralización, acuerdos, decisiones tomadas, o la representatividad de sus dirigentes (1996: 57-58). Éste es precisamente el punto neurálgico de la difícil relación con el gobierno. Como señala la congresista Anel Townsend, miembro de la Comisión de la Mujer del Congreso —y quien ha recibido decenas de denuncias de señoras que se han visto presionadas por representantes del gobierno—, “el gobierno ha demostrado que no respeta las instituciones ni formas de organización autogestionarias. Si subvencionan, intervienen, disponen, eligen autoridades, acusan a las señoras de controladoras del poder y se les ajusta la supervisión”.⁷

La valoración y defensa de la autonomía tan característica de las OFA, siendo positiva en el sentido de fortalecer la identidad, cohesión, organización y continuidad del grupo, también genera consecuencias negativas, ya que introduce factores de tensión, aislamiento o rivalidad. En efecto, la defensa de la autonomía genera desconfianza respecto de las “otras organizaciones”, corolario de una continua experiencia de manipulación, desconocimiento y engaño. Estas organizaciones tienen dificultad para relacionarse horizontalmente con otras, incluyendo a las mismas OFA. Asimismo, la tensión también se genera entre la dirigencia y las socias de base, sobre todo cuando las dirigentes se acercan demasiado a otras instituciones en el cumplimiento de sus deberes (Lora, 1996: 58-59).

Discrepancias respecto al papel de las OFA

Cabe indicar que la constante exposición a las influencias externas, ya sean del gobierno, de las ONG o de la cooperación internacional, es una característica general de las OFA. Esta circunstancia ha generado una visión ambigua en los investigadores sociales respecto de la naturaleza de estas organizaciones. Por un lado, se les percibe como carentes de una identidad definida, cambiantes o “camaleónicas”, según las condiciones

⁷ Véase el artículo “Debe respetarse el derecho a la autonomía”. *El Comercio*, 2 de octubre de 1999.

que les son impuestas, y cuyo fin último sería únicamente seguir recibiendo la ayuda alimentaria a cualquier costo. Por otro lado, se considera esta actitud como una muestra de pragmatismo, producto de las necesidades familiares de las mujeres en situación de pobreza, y que no compromete su verdadera identidad (Tovar, 1996: 78).

El resultado de esta controversia conceptual ha llevado a algunos autores a cuestionar la esencia misma de estas organizaciones, que en los primeros momentos de su creación y crecimiento fueron vistas como entidades que transformarían el orden social y económico. Pásara (1991: 76), por ejemplo, afirma que no constituyen verdaderos frentes de cuestionamiento ni de alteración del *statu quo*, puesto que los actores sociales que las conforman tendrían una particular tendencia al aislamiento y la retracción, estando sus servicios limitados a un rango pequeño de la población.

Tocón comparte una opinión similar. Afirma que "las [OFA] surgen y subsisten como intentos de administrar los escasos recursos de la mejor manera posible. No se plantean la solución de los problemas de subsistencia [...] tampoco cuestionan las relaciones de dominación para pretender un cambio del orden social. Se limitan a la atención de sus necesidades e intereses prácticos en una óptica de asistencia social" (1998: 29). Desde esta perspectiva, la naturaleza de las OFA estaría dominada por los fines prácticos que persiguen, antes que orientada a constituir un movimiento que analice, cuestione y demande cambios en las políticas gubernamentales.

Sin embargo, el exhaustivo estudio de Lora, que tiene como sustento más de una década de trabajo con las OFA, deja en evidencia su potencial como movimiento social. Desde una postura crítica a los discursos de políticos e investigadores que han interpretado al movimiento de comedores como asistencialista y propenso a una relación clientelista con el Estado, ella afirma que esta visión es producto de un prejuicio que tiene que ver con el ámbito de desenvolvimiento de estas mujeres: la alimentación, es decir, pertenece a la esfera del consumo y no al de la producción, espacio modelo donde se han desarrollado los movimientos obreros y sus formas clásicas de lucha (Lora, 1996: 70). En consecuencia, las mujeres de las OFA, y especialmente de los comedores autogestionarios, estarían desarrollando un movimiento de características innovadoras que cuestiona las propias políticas gubernamentales:

Tener que negociar con el Estado no supone necesariamente una relación de clientelaje político [...] Ello no niega que haya en su interior formas que

buscan conseguir logros en la negociación estableciendo condiciones —siempre precarias— de clientela y de mutuo beneficio [...] La orientación básica del movimiento sin embargo [es la] de construir institucionalidad y una relación consistente con el Estado en orden a generar mecanismos de política alimentaria independientemente del color político de cada gobierno [1996: 71].

Liderazgo: componente fundamental de las OFA

Finalmente, conviene destacar el papel de las líderes o dirigentes de las OFA. Si bien se les reconoce acertadamente como espacios reivindicativos de género, en la medida que capacitan y entrenan a las madres para su desenvolvimiento en el medio social, el “liderazgo permanente” de algunas de sus dirigentes se convierte en un “arma de doble filo” para estas organizaciones. En efecto, las OFA terminan convirtiéndose en entidades sumamente dependientes de las personas que las dirigen y, en la mayoría de los casos, su actitud y eficacia depende de las características de las mujeres que asumen el liderazgo. En principio, es sólo una dirigente —o unas pocas— quien asume la mayor responsabilidad en la operatividad de las OFA. Esta constatación cuestiona la participación social de las socias; si bien un comedor puede tener, en promedio, alrededor de 25 socias activas, sólo unas cuantas se comprometen a asumir funciones de dirigencia.

Por otro lado, un estudio señala que los CM mejor organizados son aquéllos cuya dirigente principal —en general, la presidenta— tiene mayor grado de liderazgo, capacidad organizativa y cultura; asimismo, establece una relación directa entre la presencia de una líder dinámica y el buen funcionamiento de la microempresa y el CM (Beltrán *et al.*, 1997: 17). En consecuencia, el adecuado funcionamiento de las OFA depende en gran medida de la capacidad de sus dirigentes. El problema se presenta cuando se genera una brecha entre las dirigentes y las socias de base (Tovar, 1996: 122).

Esta brecha es una muestra de la debilidad de este tipo de organizaciones. En efecto, cuando la dirigente, que ha conseguido sacar adelante a un CP o un CM a partir de su esfuerzo y cualidades personales, decide alejarse de la organización, ésta se resquebraja en la medida en que las demás socias hayan depositado en dicha persona las razones del supuesto éxito. En algunos casos, la misma organización es producto de la apuesta personal de una de las señoras que se convierte en la líder y motor de la organización. En estos casos, los fines y objetivos de las demás socias

no responden necesariamente a sus propias necesidades. Este hecho trae como consecuencia que la continuidad y sostenibilidad de una buena gestión sea extremadamente dependiente de la permanencia de una determinada dirigente —o grupo de dirigentes—, y no de un adecuado proceso de renovación de socias que se hagan cargo adecuadamente de la organización. En muchos casos, la renovación de dirigentes trae consigo un extenso periodo de reconstitución o reacomodamiento de funciones, que ponen en riesgo las actividades que las organizaciones ya llevan a cabo con relativo éxito.

ANTECEDENTES DE SUS RELACIONES POLÍTICAS CON EL SECTOR GUBERNAMENTAL (1950-1989)

La constitución de las OFA está asociada por definición a las poblaciones de los sectores populares y sus experiencias de vida en asentamientos humanos, siendo ellas quienes han sufrido en mayor medida la crisis económica que se fue agudizando a partir de la década de 1970. Por ello, para entender mejor las relaciones políticas entre el Estado y las OFA, nos centraremos en la interacción que ha existido, desde mediados del siglo XX, entre el gobierno y los sectores populares en general.

Desde la formación en Lima, durante el decenio de 1950, de los primeros asentamientos humanos —entonces llamados “barriadas”—, se generó una expectativa pesimista en la sociedad peruana respecto al papel político que desempeñarían estos pobladores migrantes y empobrecidos. La amenaza de una invasión generalizada de los habitantes de estos “cinturones de pobreza” a las zonas residenciales de la Lima aristocrática generaba temor y preocupación entre los miembros de las clases sociales altas, los políticos y los gobiernos que los representaban. Sin embargo, los temores resultaron infundados, ya que a pesar del incremento de estas zonas marginales en la Lima “oficial”, nunca se originaron movimientos políticos importantes que pusieran en riesgo las estructuras establecidas de la sociedad tradicional.

Collier (1978), en su estudio sobre las relaciones entre las élites y los sectores populares, considera que la formación de barriadas correspondía precisamente a un elemento no de amenaza, sino de contención política, demostrando que las propias élites políticas las fomentaban clandestinamente durante extensos periodos a través de las llamadas “invasiones”. Collier afirma que la inseguridad asociada con la ausencia de títulos de propiedad y el temor a la “erradicación” servían para crear una relación de dependencia entre las barriadas y el Estado, lo que a

su vez desalentaba conductas políticas “desquiciadoras” entre sus pobladores.

Asimismo, la autonomía y la autosuficiencia, características inherentes a las estrategias de autoayuda propias de la vida en barriadas, actuaban como mecanismos desalentadores de alternativas políticas radicales. Es más, el autor considera que la formación de las barriadas “fue consentida, en parte, porque eran una solución económica a la escasez de vivienda y al problema de la pobreza. Las barriadas ofrecen también grandes oportunidades de incorporar al residente urbano pobre a la vida política, de modo conveniente al gobierno” (1978: 51).

Basta hacer un ligero intercambio de términos —“barriadas” por “organizaciones para la alimentación”— para constatar la semejanza de la situación. En ambos casos, el Estado estaría “sacando partido” de la satisfacción de ciertas necesidades primarias de la población —vivienda en un caso, alimentación en el otro—, no sólo para conseguir un control político sobre las poblaciones más pobres, sino para incorporarlas a su propia visión política como bases de apoyo social. La actitud del Estado respecto de los sectores populares, sin embargo, ha sufrido modificaciones según los gobiernos de turno y el origen social de sus representantes en el poder, aunque es posible identificar algunas continuidades a lo largo de la segunda mitad de la década de 1990.

El gobierno de Odría (1948-1956) se caracterizó por establecer una relación dependiente y paternalista con los sectores populares, basada en la caridad y el regalo, y en contraposición con las actividades proselitistas del APRA, que buscaba que la ayuda llegara no como dádiva del gobierno, sino como producto de la movilización y la organización de los intereses de las clases necesitadas. Odría fue exitoso con su estrategia paternalista, ya que a cambio de su ayuda a las barriadas recibió el apoyo social que le permitió legitimar su mandato (Collier, 1978: 71-73).

Cuando Manuel Prado sube al poder en 1956, la política gubernamental hacia los sectores populares toma un nuevo rumbo. Prado es representante de los sectores liberales y, como tal, rechaza el paternalismo del gobierno anterior. Su interés estuvo centrado en el fortalecimiento de la independencia de la población respecto al Estado. De esta manera, intenta crear “un mundo altamente estructurado basado en la propiedad y en la autoayuda, que enseñaría al pobre a cuidar de sí mismo y lo alejaría de movimientos políticos disociadores” (Collier, 1978: 93). El supuesto implícito era que al convertir en propietarios a los pobres, éstos se volverían más conservadores puesto que tendrían algo que proteger. El gobierno se orientaba a considerar que el problema número uno de Perú era la vivienda —“el sueño de la casa propia”—, distraendo la

atención de otro tipo de problemas económicos y sociales, como la pobreza, que desde el punto de vista de los sectores social-progresistas de entonces era la causa de las malas condiciones de vivienda, nutrición, educación, salud y vestido. Según la opinión de David Collier, Prado estaba más interesado en favorecer los intereses inmobiliarios, bancarios y comerciales, que en satisfacer las necesidades de los sectores populares.

Como parte de la oposición a este tipo de políticas liberales, en 1961 fue aprobada la Ley 13517. Ésta fue el producto de la labor realizada en las barriadas por la Corporación Nacional de la Vivienda —organismo estatal creado en la década de 1940—, y fue apoyada por parlamentarios apristas y otros afines a este partido. En ella, el Estado se comprometía a formar nuevas barriadas cuando se comprobara su necesidad, así como a remodelar y legalizar las ya existentes. De esta forma, se trataba de dejar de lado la informalidad, ya que las invasiones eran fuente de desorden y conflicto social. Aunque tal ley tuvo problemas en su aplicación, y luego causó la decepción y rechazo de los pobladores de las barriadas al mostrarse ineficaz el gobierno para cumplir sus compromisos, esta política se distanciaba de la del periodo liberal en la medida en que el Estado asumía mayores responsabilidades en el desarrollo de estas zonas populares. De la misma forma, se diferenciaba de las políticas del régimen de Odría, ya que se trataba de un compromiso mucho menos personalista y dependiente, pues los propios pobladores debían cubrir el costo de los servicios públicos y el pago simbólico del terreno que ocuparan.

Fernando Belaúnde (1963-68) y su partido, Acción Popular, construyeron su base social en las zonas rurales de Perú, por lo que sus programas de gobierno se dirigieron principalmente a desarrollar el interior del país, dejando de lado una política intensiva en los sectores populares urbanos. Ésta es la razón por la que las mayores inversiones en vivienda tuvieron muy poca relación con los sectores populares. A diferencia de los gobiernos anteriores, se privilegió la construcción de proyectos de vivienda para familias de clase media y media-alta, que constituían su base de apoyo político en las zonas urbanas.

Distinta fue la manera de encarar las políticas gubernamentales durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). En este caso, los asentamientos humanos fueron el centro de dos objetivos básicos que daban forma a su política: la promoción del desarrollo basado en la autoayuda y la obtención de apoyo político. Como consecuencia de las crisis políticas, se creó el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilidad Social (Sinamos), institución estatal creada para establecer nexos directos entre el gobierno y el pueblo en general, con el fin de mejorar la capaci-

dad de la burocracia gubernamental para responder al público y permitir la expresión de las aspiraciones del pueblo ante el gobierno. Este segundo objetivo debía conseguirse a través de las organizaciones sociales de la propia población, así como con la “orientación” de la participación popular desde los predios militares (Collier, 1978: 116). En otras palabras, la implantación del Sinamos agregó un nuevo ingrediente en la relación gobierno militar-sectores populares: el control político.

Es necesario hacer hincapié en un elemento que merece mayor atención. El gobierno militar de Velasco fue, a diferencia de los gobiernos anteriores, el único que propició e impulsó la formación de organizaciones sociales de base con el fin de construir una sociedad nacional basada en unidades parcialmente autónomas que utilizaran la autogestión como estrategia de acción. Debe destacarse la agudeza de Collier al percibir que esta política del gobierno militar significaba un intento de promover un tipo de apoyo popular y la participación controlada de la población, una que no estuviera relacionada con la formulación de exigencias políticas —excepto aquellas de corte local—, con el fin de socavar el papel tradicional de los partidos políticos (Collier, 1978: 128).

Por tanto, la dinámica de formación de organizaciones sociales se gesta durante la década de 1970, continuando su marcha de manera autónoma —aunque impulsada parcialmente por los siguientes gobiernos ya en la “era democrática”— y configurando luego el extenso mapa de organizaciones de diferente y muy variada índole que conocemos en la actualidad. El surgimiento de estas organizaciones confluye, a su vez, con las políticas de cooperación internacional vigentes a comienzos de la década de 1980, que van a ser fundamentales para el progresivo aumento del número de las OFA.

En efecto, en 1979 el gobierno peruano firmó un convenio con su par estadounidense, mediante el cual éste se comprometía a donar sus excedentes agrícolas a Perú a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID); pero la condición establecida para la entrega de los alimentos fue el elemento clave: sólo se realizaría a grupos de mujeres que los prepararan colectivamente. Ése es el contexto en el que surgen los primeros CP (Blondet, 1991: 115).

El segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985) se caracterizó por utilizar la oferta de alimentos para fortalecer sus clientelas políticas, en una estrategia de captación de bases de apoyo político en zonas pobres urbanas, y en el contexto del desbordante flujo migratorio del campo a la ciudad y el despoblamiento de las zonas rurales. Sin embargo, la relación del gobierno de Belaúnde con las OFA no dejó de tener un estrecho parentesco con la manera tradicional —caridad y paternalismo— de

establecer vínculos entre las élites gubernamentales y los sectores populares. Y es que a partir de la experiencia de los tradicionales CM y los primeros CP organizados por las parroquias, la oficina de Cooperación Popular, que era dirigida por la esposa del presidente, Violeta Correa, fundó las “cocinas de Violeta” (Blondet, 1991: 115).

Una tradición similar cumplió la esposa del presidente Alan García durante el gobierno del partido aprista (1985-1990). Ella tenía a su cargo la dirección del Programa de Apoyo Directo (PAD), entidad del Estado destinada no sólo a captar una base social de apoyo político —que se traducía en realidad en el fortalecimiento de sus redes de clientelismo—, sino a fomentar el trabajo productivo (Blondet, 1991: 116).

La autonomía de estos clubes PAD, o “comedores del pueblo”, estaba severamente restringida por el control del partido oficialista. Para tal fin, se encargó a la Secretaría Nacional de Urbanizaciones Populares del APRA la supervisión de los comedores inscritos en el programa, organismo que tenía la facultad de reorientar el funcionamiento o administración de la organización, la renovación parcial o total de los equipos de trabajo, e incluso la cancelación del convenio con el consiguiente retiro de los fondos oficiales. De acuerdo con Lora, el movimiento de comedores autogestionarios —que se oponía a aceptar las condiciones del gobierno en turno— se enfrentó a estas relaciones políticas clientelistas propuestas desde el sector gubernamental y defendió la autonomía de sus organizaciones socias, a pesar de ser ignoradas y discriminadas por los diversos programas que se pusieron en práctica en dicho periodo presidencial (1996: 104-105).

Los programas de gobierno, sin embargo, no consiguieron generar una mayor dinámica y protagonismo social entre las mujeres socias de las OFA. Como señala Blondet, las señoras más necesitadas se acercaban a las organizaciones con el fin de recibir los alimentos y beneficiarse de los servicios (1991: 117). Muy pocas eran las que asumían posiciones de liderazgo, y asistían a las capacitaciones porque era una condición para seguir recibiendo la ayuda o no pagar la multa que correspondía en caso de inasistencia.

Esta mirada global a las relaciones entre el Estado y los sectores populares permite establecer algunas continuidades, a pesar de la diversidad de orientaciones gubernamentales. Una de ellas, por ejemplo, es la permanente actitud autoritaria y vertical asumida desde el ámbito estatal. Las poblaciones de los sectores populares rara vez han sido “interlocutoras horizontales” para expresar sus propias expectativas y alternativas de solución a los problemas que enfrentaban —excepto un determinado periodo durante el gobierno militar de Velasco—. Desde las

altas esferas del Estado, los sectores populares han aparecido como una masa desintegrada y pasiva que necesita ser alimentada, sostenida y guiada. La formación de organizaciones sociales es aceptada entonces en la medida en que permita la solución de problemas inmediatos y de carácter local, y no cuestione los fundamentos del orden social, económico y político imperante.

Otra de las continuidades que pueden establecerse es que el interés del sector gubernamental respecto de la situación de los sectores populares obedece más a la obtención de bases sociales de apoyo político que a una preocupación real por sus condiciones de vida. Desde esta perspectiva, la relación entre el Estado y los sectores populares se convierte en una especie de transacción económica, comercial; en un intercambio de beneficios —apoyo político por un lado, alimentos gratuitos por el otro—, pero de naturaleza desigual y asimétrica; en una propuesta estatal de relación con características clientelistas, donde obviamente el “patrón” tiene ventaja sobre el “cliente”. En una relación de este tipo, la contraparte “superior” actúa libremente y de modo arbitrario, mientras que la “inferior” no tiene la disponibilidad de recursos para hacerle frente (Collier, 1978: 74).

Finalmente, cabe indicar que los sectores populares también tienen protagonismo en el establecimiento de este tipo de relación con el Estado. Tovar señala que el cabildeo político, generalmente asociado a situaciones extremas de crisis económica, en el que las recompensas materiales son buscadas ansiosamente, se produce también en contextos donde no hay tales condiciones (Tovar, 1996: 42). Esto supondría el cabildeo político casi como una condición natural de los pobladores de asentamientos humanos, dadas las condiciones de inestabilidad y precariedad en la que se desenvuelven.

La relación con los municipios

La relación de las OFA con los gobiernos locales puede rastrearse desde comienzos de la década de 1980 —cuando los alcaldes volvieron a ser elegidos democráticamente—, especialmente para el caso de los comedores de base y sus instancias de centralización —“Central de Comedores”—, aunque la relación consistiera básicamente en la coordinación de acciones para tener acceso a servicios, abastecimiento de agua, control de balanzas y recolección de basura.

Con la reciente llegada de Alfonso Barrantes a la alcaldía de Lima metropolitana, en 1983, se establece una relación más directa con estas

organizaciones. Los planteamientos ediles de los miembros del partido ganador —Izquierda Unida— incluían el diseño de un Programa de Emergencia Alimentaria basado en dos líneas de acción: una dirigida a los CP y la otra a los CVL (Lora, 1996: 134). El Programa del Vaso de Leche se inicia en abril de 1984, y en pocos meses se cumple la meta propuesta de proporcionar un millón de vasos de leche en Lima. Es el acta de nacimiento de estos comités compuestos y operados por madres de familia.

En el distrito, las relaciones con las OFA han sido puntuales. Si bien el Programa del Vaso de Leche se extendió rápidamente incluso a los municipios de provincia, no hubo propuestas de los CP dirigidas a las secretarías municipales, por lo que no se pudo generar una relación más estable. Sin embargo, se pueden mencionar algunos casos. En muchos distritos los municipios destinaron terrenos ediles para edificar un local que sirviera para el funcionamiento del CP. En el distrito limeño de San Martín de Porres, el municipio ayudó a la gestación de la central distrital de comedores durante el periodo 1983-1986. Experiencias interesantes también ocurrieron en los distritos limeños de Comas y Puente Piedra, donde las centrales de comedores y los municipios trabajaron conjuntamente durante la segunda mitad de la década de 1980, e incluso las organizaciones asumieron responsabilidades en el manejo de camales y puestos regulatorios de venta de carnes (Lora, 1996: 136).

Sin embargo, Lora constata que muchas veces el municipio entra en relación con las mujeres de las OFA por un móvil utilitario, en la medida en que ellas constituyen la posibilidad de llevar adelante diferentes tipos de campaña y asegurar, por ende, su resultado. Por otro lado, en algunos municipios suele considerarse a las mujeres de las OFA —especialmente a las de los CP— como “protestonas,” y por eso prefieren establecer una relación de distancia con ellas (1996: 137).

CAMBIOS EN EL CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO: LA ADMINISTRACIÓN FUJIMORI

Para entender las características de la sociedad peruana durante la década de 1990 —y, por ende, la relación entre el Estado y las OFA— es necesario observar algunos cambios sociales que se gestaron durante la década de 1980. Entre los que señala Balbi (1996: 188-190) están: 1) la redefinición del tejido social en el país, que obedece a la “informalización” de la población trabajadora, y que tendrá efectos claros en la crisis de representación cuya señal más evidente es el descrédito de los partidos

políticos; 2) el marcado debilitamiento o “atomización” de los actores sociales y, por consiguiente, de la lógica de acción colectiva, y 3) los “cambios sustantivos en el papel del Estado en el Perú y América Latina [que llevarán] a que el Estado deje de ser garante de la inclusión social, produciéndose en los hechos una abdicación implícita de su papel en la promoción de la integración social, a través del compromiso con un sustento y extensión de los derechos ciudadanos, que en lo sucesivo quedan en gran parte asignados al mercado”.

Este es el contexto en el que la sociedad peruana se enfrenta al proceso electoral de 1990. Ese año se manifiesta claramente como un punto de inflexión de la realidad social peruana, cuyas repercusiones se van a extender a lo largo de la década. En el plano político, la elección de Fujimori significó la llegada al poder de un personaje sin sustento partidario, liderando una corriente de opinión más que un movimiento social. En el plano económico, el mismo Fujimori instauró una política de ajuste estructural que permitió mejorar las condiciones macroeconómicas, pero que a la larga condujeron a un empeoramiento de las condiciones de vida de los peruanos, y con ello de la pobreza (Portocarrero *et al.*, 1998: 3). Igualmente, se hicieron manifiestas las consecuencias de esta política económica en el incremento de la desigualdad y la mayor concentración del ingreso.

Sin embargo, el ajuste estructural tiene consecuencias sociales y políticas que se manifiestan en lo que algunos autores han dado en llamar “desdemocratización”. Es decir, una situación en la que la vida política entra en “recesión”, y en la que en aras de “sanear la democracia” se sacrifica la existencia de cualquier actividad política o social que no se encuentre dentro de los planes gubernamentales. De esta forma, la política aparece como un bien superfluo y, más aún, negativo, en la medida en que se presenta como una “interferencia” a los planes económicos (Adrianzén, 1992: 8).

La existencia misma de los partidos políticos es cuestionada, estimulándose la creación de nuevos espacios de legitimidad que canalicen nuevos consensos y solucionen los conflictos. Por eso, dice Adrianzén, “cuando el caudillo llega o accede al poder no institucionaliza estos nuevos consensos, ni los conflictos [...] Al contrario: establece una relación, por un lado, fragmentada y clientelista con determinados grupos sociales y, por el otro, circunstancial, momentánea y caudillesca con una masa generalmente excluida de la economía por el proceso de ‘dualización’ de la sociedad que el ajuste provoca” (1992: 17). En otras palabras, se refuerza un contexto vertical de relaciones entre el Estado y los sectores populares.

De esta forma, resulta evidente que el gobierno del presidente Fujimori no ha escapado al marco histórico de relación expuesto en el acápite anterior. Desde los primeros años de la década de 1990, fue evidente para el gobierno que las OFA ofrecían grandes ventajas para desarrollar un programa de asistencia alimentaria, uno que aliviara de alguna manera las consecuencias del ajuste macroeconómico. Entre estas ventajas, para el caso de los CP, se encontraban “no solamente la experiencia acumulada —que permitía un uso eficiente de los alimentos a través de las ollas comunes, mediante las cuales se reducían costos y mejoraban la calidad de las raciones servidas en comparación a cocinar los alimentos individualmente—, sino también el trabajo voluntario de las socias, que reducía aún más los costos monetarios de la preparación de los alimentos” (Sanborn y Cueva, 1999: 15). A estas ventajas habría que añadir los potenciales beneficios políticos que el gobierno esperaba conseguir.

El resultado de esta situación es una clara continuidad en la actitud gubernamental respecto de las OFA, especialmente con los CP, durante los gobiernos de García y Fujimori. Lora identifica tres aspectos que pueden utilizarse a manera de conclusión de las relaciones políticas históricas entre el Estado y las OFA, y que sirven de apoyo para entender las actuales características de dicha relación: 1) una permanente desconfianza y rechazo ante la autonomía de este tipo de organizaciones, ya que no garantizan la capitalización política de los programas sociales para el partido gobiernista en términos de clientela política; 2) la identificación de una resistencia a reconocer la interlocución de las instancias de centralización o de segundo nivel —y, en cambio, privilegiar el contacto directo con los CP o los comités de base—. Este punto es fundamental para entender la postura actual del sector gubernamental en la que predomina la suspicacia y acusaciones de manipulación política de las OFA, y 3) la precariedad de los compromisos asumidos por el Ejecutivo con estas organizaciones, que luego son desestimados e incumplidos (1996: 11-116).

CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES POLÍTICAS ENTRE LAS OFA Y EL SECTOR GUBERNAMENTAL DURANTE LA DÉCADA DE 1990

Mujeres con propuestas

Si bien el surgimiento de las OFA se explica por la necesidad de las mujeres de los sectores más empobrecidos de solucionar ellas mismas las de-

ficiencias alimentarias de sus familias, no quiere decir que en sus dos décadas de existencia estas organizaciones se hayan limitado a cumplir una función puramente operativa y de satisfacción de sus intereses inmediatos. Por el contrario, estas mujeres comenzaron a formular propuestas y demandas al Estado, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones en el campo de las políticas sociales (Lora, 1996: 50).

En efecto, desde la primera mitad de la década de 1980, se formaron las primeras centrales de comedores, un segundo nivel de agregación de mujeres populares que agrupaba a los comedores de base según sectores, zonas o distritos, y cuyas funciones no eran las de brindar servicios alimentarios, sino generar propuestas colectivas en el campo de la alimentación. En 1986 se forma la Comisión Nacional Provisional de Comedores (CNC), integrada por organizaciones de este tipo provenientes de diferentes regiones del país. La CNC cumplió un papel fundamental en las manifestaciones públicas realizadas en Lima en septiembre de 1988, que marcaron la aparición de estas organizaciones en el escenario político y público peruano con una fuerza inusitada hasta entonces. Las organizaciones de comedores interpelaron al Estado con una propuesta alimentaria seria y congruente, elaborada como reacción al “paquetazo” del gobierno de García, y que básicamente consistía en un pedido de otorgamiento de subsidios directos a esas organizaciones con el fin de que el Estado se comprometiera a participar en la solución de los problemas alimentarios de grandes sectores de la población.

Si bien la marcha denominada “Protesta con propuesta” no fue escuchada por el gobierno en turno, las manifestaciones sirvieron para que las mujeres de estas organizaciones percibieran sus capacidades organizativas; además, la marcha dejó sentada la importancia de la agregación de fuerzas con otras organizaciones similares —obtuvieron el apoyo de la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche y de la Federación de Mujeres de Villa El Salvador—. Un aspecto importante de la manifestación era hacer sentir que el ajuste tenía un costo social inmenso y que no era tan sólo una “medida económica” (Lora, 1996: 55).

El fracaso en la consecución de los objetivos presentados al presidente García no disminuyó el ímpetu de estas organizaciones. Las mujeres crecieron y se afianzaron organizativamente —p. e., en 1991 se fundó la Federación de Centrales de Comedores Populares Autogestionarios de Lima y Callao (Feccpalc),⁸ un tercer nivel organizativo—, manteniendo su propuesta durante los siguientes años, hasta convertirla finalmente

⁸ Hoy Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao (Femoccpalc).

en la base de la Ley 23507 promulgada durante los primeros años del mandato de Fujimori. Dicha ley reconocía legalmente a las “organizaciones sociales de base” y comprometía al Estado a cubrir 65% de los costos de los menús de los comedores, dejando 35% a cargo de las propias socias o sus comensales.

La continuidad de funcionamiento de estas organizaciones y su capacidad para sobrellevar momentos de crisis económica muy profundos, como la hiperinflación de los años 1989 y 1990, han confirmado que este movimiento de mujeres no depende ni del éxito de sus reivindicaciones ante el Estado ni de las donaciones recibidas, como habitualmente se cree (Lora, 1996: 56). Por el contrario, consiguieron que el sector gubernamental aumentara progresivamente su apoyo alimentario y asumiera su papel en el campo de las políticas sociales.

Durante la década de 1990, la estrategia de interlocución de estas organizaciones con el Estado se ha mantenido a través de los consabidos memoriales y marchas “a Palacio” o “al Congreso” que, aunque de eficacia dudosa, sirven como reafirmación y demostración pública de la capacidad organizativa de las mujeres. Este tipo de manifestaciones no se limita a los reclamos de corte alimentario. Numerosas marchas han sido realizadas con el fin de repudiar las acciones de violencia política; es el caso de la masiva movilización de septiembre de 1991, en la que la CNC y la Coordinadora Metropolitana del Vaso de Leche elaboraron conjuntamente una Plataforma de Pacificación (Lora, 1996: 110); o de la Marcha por la Paz en el distrito limeño de Ate-Vitarte en mayo de 1997, que consiguió agrupar a delegaciones de CP y CVL del distrito, así como de otras comunas capitalinas. Otras marchas han sido realizadas con el fin de proteger sus intereses organizativos, como la realizada en julio de 1997 por las calles de Lima, donde las integrantes de diversos CVL protestaron por el intento de la comuna limeña de crear una organización paralela a la Coordinadora Metropolitana y dividir así a los comités de base. Finalmente, cabe destacar que este progresivo aumento de protagonismo político de las mujeres integrantes de las OFA ha llevado a que algunas de sus dirigentes asuman papeles más comprometidos en este campo. Las últimas elecciones municipales demostraron que esto era posible, ya que fueron elegidas como regidoras dos dirigentes de los CP y cinco de los CVL en los 42 distritos de Lima metropolitana.⁹

⁹ Véanse los artículos publicados en *El Comercio*: “Marcha por la paz hubo en Carretera Central” (18 de mayo de 1997), “Las mujeres ocupan casi un tercio de las curules en los concejos de Lima” (17 de octubre de 1998) y “Dirigentes del Vaso de Leche protestaron por irregularidades en organización” (9 de julio de 1997).

La política alimentaria a través del Pronaa

En febrero de 1992, el gobierno de Fujimori creó el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), con el fin de apoyar la atención de las necesidades alimentarias de la población de escasos recursos. Este organismo concentrará el protagonismo de la política alimentaria del gobierno estableciendo relaciones permanentes con los CP y los CM desde entonces, y brindándoles alimentos gratuitos que faciliten su operación. Según el gobierno, la condición esencial que establece que estas donaciones sean consumidas colectivamente, en el caso de los comedores obedece a la intención de estimular el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Este hecho produjo la retroalimentación del proceso de formación de los CP, cuyo número creció exponencialmente en los últimos años. No obstante esta “condición explícita” que exigía el Pronaa, en la práctica las socias de los CP han constatado condiciones implícitas, no verbalizadas ni públicas, que reafirman la histórica orientación gubernamental respecto de los sectores populares. Así, en el ámbito del trabajo cotidiano, ellas son conscientes de que el reparto de alimentos debe ser retribuido, por su parte, con apoyo político al actual gobierno. En un estudio sobre las políticas alimentarias en Perú (Portocarrero *et al.*, 1998: 136), se refiere que desde el Pronaa se espera el cumplimiento de determinadas actividades por parte de las socias de los CP y los CM, a cambio del apoyo alimentario y otro tipo de concesiones —como la entrega de cocinas, ollas y automóviles.¹⁰

Tales actividades muestran la tergiversación de los fines originales del Pronaa al comprobar que son asumidas anualmente como parte de las “tareas normales” de los comedores, es decir, forman parte de las obligaciones establecidas e institucionalizadas por las propias socias. Según las mismas beneficiarias de los programas de apoyo alimentario, ellas están “obligadas” a participar en actos políticos a favor del gobierno a cambio de la asistencia alimentaria.¹¹

El mismo estudio llama la atención sobre las discrepancias de perspectiva de los propios involucrados respecto de la relación entre el Pronaa

¹⁰ Algunas de estas actividades consisten en la participación en diversas marchas y manifestaciones oficialistas, elaboración de tortas y participación en la celebración del cumpleaños del presidente de la República, la aportación de insumos y la elaboración de alfombras de flores que decoran la Plaza de Armas durante la procesión del Señor de los Milagros, etc. Actividades que, como es evidente, distan mucho de los objetivos formales del Pronaa.

¹¹ Algo que el gobierno y Fujimori niegan sistemáticamente. Sin embargo, en mayo de 1999, la presidenta de Femoccpalc, Relinda Sosa, denunció estas presiones a sus organizaciones. Al respecto, véase el artículo “Organismos públicos utilizan a Comedores Populares con fines políticos”. *El Comercio*, 29 de mayo de 1999.

y los CP. Si bien dicho programa actúa desde una perspectiva asistencialista, las socias de los comedores no lo entienden así, porque asumen que es su “derecho” recibir tales donaciones; esta diferencia de percepciones “no sólo ha contribuido al surgimiento de la manipulación política, sino también a la ausencia de respeto a la propia autonomía de los CP. En este sentido, las beneficiarias entrevistadas indican que cualquier actividad de los comedores tiene que ser informada; además, en Pronaa se estaría intentando establecer formas para participar en las asambleas de los comedores” (Portocarrero *et al.*, 1998: 135).

Este excesivo intento de intervención por parte de los funcionarios del Pronaa en las actividades de los comedores ha generado el reclamo persistente de sus socias respecto de una mayor capacidad de interlocución. De acuerdo con sus propias declaraciones, el gobierno dispone de manera unilateral de las condiciones de la relación entre ambas instituciones, dejando de lado la opinión de las propias beneficiarias. Incluso el Pronaa desconoce la participación de la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima y Callao (Femoccpaalc) en la negociación de las condiciones de la relación para extender los beneficios de la misma a un mayor número de pobladores. La actitud del gobierno manifiesta una clara intención de relacionarse individualmente con cada uno de los comedores beneficiarios, y expresa una preferencia por no intervenir cuando la institución que le toca la puerta trasciende el carácter local y representa un nivel de organización más amplio.

Por otro lado, como se dijo, los compromisos asumidos por el Estado no siempre se cumplen, siendo el hecho más grave y escandaloso haber promulgado la Ley 23507, que estipula de interés nacional prioritario la labor de las OFA, y no haber destinado dinero para el cumplimiento de sus obligaciones desde la fecha de promulgación de la ley —febrero de 1991— sino hasta cuatro años después (Lora, 1996: 118). Igualmente graves son las denuncias de las beneficiarias acerca del incumplimiento del compromiso del Estado de subsidiar 65% del costo de las raciones; según las mismas mujeres, nunca se llegó a esa cifra y, por el contrario, disminuyó hasta 13%, de acuerdo con sondeos realizados por la Femoccpaalc.¹² La consecuencia es que las señoras ya no compran menús para cada miembro de la familia, sino que adquieren un número menor de raciones, con el consiguiente deterioro nutricional.

Asimismo, esta actitud del Pronaa afecta el desarrollo personal y social de las mujeres socias de los comedores. Su reclamo por una mayor

¹² Véase el artículo “Subsidio a Comedores Populares no alcanza”. *El Comercio*, 2 de octubre de 1999.

participación está relacionado con que ya no se consideran “mujeres simples de la comunidad”, sino que ahora tienen un papel en la sociedad, ya que al desarrollarse la mujer, lo hace también su comunidad y, como consecuencia, el país (Portocarrero *et al.*, 1998: 137). La preocupación de las socias busca ampliar su espectro de acción, desde las tareas alimentarias hacia otros campos donde puedan desarrollar sus nuevas habilidades de organización y gestión.

En resumen, la actitud del Estado respecto de los CP está marcada por una tendencia asistencialista y clientelista, dirigida a obtener beneficios políticos. Esta actitud, lejos de incentivar la labor autónoma de estas organizaciones sociales integradas por mujeres, significa una “ayuda de doble filo”, ya que si por un lado el gobierno proporciona parte de los insumos necesarios para la operatividad de los comedores, por otro lado retrae la capacidad de estas organizaciones para desplegar sus beneficios sobre las propias socias.

COMENTARIO FINAL

El surgimiento de las organizaciones femeninas para la alimentación (OFA) a principios de la década de 1980, y su acelerado crecimiento durante las dos últimas décadas al margen de la intervención gubernamental, demuestran que en la sociedad peruana se ha generado un tejido social cada vez más complejo y con gran potencial para construir una sociedad más integrada y solidaria. Por otro lado, nuestros datos demuestran la importancia económica que tienen las OFA y el valioso aporte que proporcionan a la economía nacional.

Desde un punto de vista social, la relación que históricamente han tenido estas organizaciones con el Estado y las políticas gubernamentales ha estado llena de altibajos. Por un lado, el Estado ha sido un apoyo importante para su proceso de institucionalización y les ha brindado un sustento material que les ayuda a seguir operando como organización; pero, por otro lado, el Estado tradicionalmente ha ignorado o amenazado las instancias de agregación de las OFA —Centrales y Federaciones—. Esta histórica actitud del Estado constituye un gran riesgo, ya que el sector gubernamental —al margen de las orientaciones políticas de sus miembros— no parece haber sido capaz de entender el potencial social de estas organizaciones, ni la posibilidad que existió de construir a través de ellas una sociedad más próspera e integrada. Aparentemente, tampoco ha sido capaz de percibir el potencial económico de las OFA, centrándose únicamente en la obtención de bases de apoyo político.

En este sentido, la forma de relación del Estado con las OFA y, en general, con los sectores populares, ha sido de carácter clientelista. Lejos de ser simples organizaciones pasivas que se encuentran a la espera de la generosidad gubernamental, muchas de las OFA —en especial los CP autogestionarios— se han opuesto permanentemente a dicho tipo de relación en aras de mantener su autonomía. De esta manera, su estrategia de respuesta ha sido el fortalecimiento de sus organizaciones de segundo y tercer nivel y, especialmente durante la década de 1990, la realización de marchas y movilizaciones destinadas a cuestionar el manejo de la política social de la administración Fujimori, así como a exigir su participación en el desarrollo de la misma.

Un escenario como el descrito permite reconocer que la explicación de la debilidad de las OFA para conseguir respuestas por parte del Estado no sólo debe buscarse en las características internas de las organizaciones, sino en condiciones externas desfavorables, un contexto que tiene como protagonista a un gobierno que ve con suspicacia el fortalecimiento y la autonomía de los ciudadanos organizados.

BIBLIOGRAFÍA

- Adrianzén, Alberto, "Democracia y partidos en el Perú", *Pretextos*, núm. 3/4, 1992, pp. 7-19.
- Balbi, Carmen Rosa (ed.), *Lima: aspiraciones, reconocimiento y ciudadanía en los noventa*, Lima, PUCP, 1997.
- , "El fujimorismo: delegación vigilada y ciudadanía", *Pretextos*, núm. 9, 1996, pp. 187-223.
- Barrig, Maruja y Amelia Fort, *La ciudad de las mujeres: pobladoras y servicios. El caso de El Agustino*, Lima, SUMBI, 1987 (mimeo).
- Beltrán, Arlette, Hanny Cueva y Armando Millán, *Evaluación del impacto del proyecto 2341.02 PMA-PRONAA*, Lima, CIUP, 1997 (mimeo).
- Blondet, Cecilia y Carmen Montero, *La situación de la mujer en el Perú 1980-1994*, Lima, IEP, 1994.
- , "El movimiento de mujeres en el Perú", en Julio Cotler (ed.), *Perú 1964-1994. Economía, sociedad y política*, Lima, IEP, 1995, pp. 149-165.
- , *Las mujeres y el poder: una historia de Villa El Salvador*, Lima, IEP, 1991.
- CEPAL, *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Edición 1996*, Chile, ONU, 1997.
- Collier, David, *Barriadas y élites: de Odría a Velasco*, Lima, IEP, 1978.
- Córdova, Patricia y Carmen Gorriti, *Apuntes para una interpretación del movimiento de mujeres: los comedores comunales y los comités del vaso de leche en Lima*, Lima, SUMBI, 1989.

- Delpino, Nena, "Las organizaciones femeninas por la alimentación: un menú sazonado", en Delpino Pásara *et al.*, 1991, pp. 29-72.
- Dietz, Henry, *Pobreza y participación política bajo un régimen militar*, Lima, CIUP, 1986.
- Gianella, Jaime, "La barriada: algunos aspectos económicos", en Rodríguez *et al.*, 1969, pp. 18-35.
- INEI, *Censo de municipalidades*, Lima, INEI, 1994.
- , *Perú: acceso a los programas sociales*, Lima, INEI, 1996.
- Lenten, Roelie, *Cooking under the Volcanoes. Communal kitchens in the Southern Peruvian City of Arequipa*, Amsterdam, CEDLA, 1993.
- Lora, Carmen, *Creciendo en dignidad: movimiento de comedores autogestionarios*, Lima, Instituto Bartolomé de las Casas-CEP, 1996.
- Pásara, Luis, Nena Delpino *et al.*, *La otra cara de la luna. Nuevos actores sociales en el Perú*, Buenos Aires, CEDYS, 1991.
- Portocarrero, Felipe, Arlette Beltrán, María E. Romero y Hanny Cueva, *Economía y política de los programas gubernamentales de apoyo alimentario en el Perú*, Lima, CIUP, 1998.
- Rodríguez, Alfredo, Jaime Gianella y Hélan Jaworski, *Aportes a la comprensión de un fenómeno urbano: la barriada*, Lima, DESCO, 1969.
- , "Notas para una interpretación del desarrollo físico de las barridas", en Rodríguez *et al.*, 1969, pp. 2-16.
- Sanborn, Cynthia y Aldo Panfichi, "Fujimori y las raíces del populismo", en Tuesta, 1996, pp. 29-52.
- y Hanny Cueva, *Entre el Estado y el mercado: la importancia del Tercer Sector para el desarrollo humano*, Lima, CIUP, 1999.
- Sosa, Relinda, "Trabajar con mujeres organizadas por una cultura de paz", en UNICEF y Femoccpaal, 1999, pp. 30-31.
- Tocón, Carmen, "Organizaciones de mujeres para la alimentación en Chimbote (1990-1992)", en Balbi, 1997, pp. 187-217.
- , *Entre ollas y cucharones, ¿movimiento social o movimiento de base? Las organizaciones de mujeres para la alimentación. El caso de Chimbote (1990-1992)*, Lima, PUCP (tesis para optar por el grado de licenciatura en sociología), 1998.
- Tovar, Jesús, *Dinámica de las organizaciones sociales*, Lima, SEA, 1996.
- Tuesta, Fernando (ed.), *Los enigmas del poder: Fujimori 1990-1996*, Lima, Fundación Friedrich Ebert, 1996.
- UNICEF y Femoccpaal, *Mujeres de comedores y cultura de paz*, Lima, UNICEF-Femoccpaal, 1999.